

BRIDGES NETWORK

PUENTES

Análisis e información sobre comercio y desarrollo sostenible

VOLUMEN 18, NÚMERO 3 - JULIO 2017



Sanidad en el agro: ¿control para protección?

MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS

Medidas sanitarias y fitosanitarias: ¿protección o proteccionismo?

TRAZABILIDAD

Trazabilidad bovina: un caso de éxito en Uruguay

MERCOSUR

Unidad regional de análisis de riesgo sanitario para alimentos en el MERCOSUR



International Centre for Trade
and Sustainable Development

PUENTES

VOLUMEN 18, NÚMERO 3 - JULIO 2017

PUENTES

Plataforma global para el intercambio de análisis e información sobre comercio y desarrollo sostenible en América Latina.

PUBLICADO POR:

ICTSD

Centro Internacional para el Comercio y el Desarrollo Sostenible
Ginebra, Suiza

PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL
Ricardo Meléndez-Ortiz

EDITOR EN JEFE
Andrew Crosby

COORDINACIÓN
Fabrice Lehmann

EQUIPO EDITORIAL
Manuela Trindade Viana
Daniela Alfaro
Bruno Varela Miranda
Rodrigo Fagundes Cezar

DISEÑO GRÁFICO
Flarvet

LAYOUT
Oleg Smerdov

PUENTES agradece sus comentarios y sugerencias en puentes@ictsd.ch

Para eventuales contribuciones consulte nuestra página web
<http://www.ictsd.org/bridges-news/puentes/overview>

MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS

- 4 **Medidas sanitarias y fitosanitarias: ¿protección o proteccionismo?**

Nelson Illescas

DEFENSA AGROPECUARIA

- 8 **La Operación "Carne Fraca" y el debate sobre defensa agropecuaria en Brasil**

Eduardo Vieira

TRAZABILIDAD

- 12 **Trazabilidad bovina: un caso de éxito en Uruguay**

María Nela González

MERCOSUR

- 15 **Unidad regional de análisis de riesgo sanitario para alimentos en el MERCOSUR**

Gustavo Idígoras

SUBSIDIOS AGRÍCOLAS

- 20 **Opciones para las negociaciones en la OMC sobre ayuda interna y agricultura**

Christophe Bellmann, Jonathan Hepburn

- 24 **Publicaciones**

Entre protección y proteccionismo



La creciente importancia de las medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) y de los requerimientos de inocuidad alimentaria genera un profundo debate a nivel del comercio internacional. De hecho, las más recientes controversias generadas por su aplicación a nivel regional nos llevan a cuestionar: ¿son las MSF un instrumento de protección en defensa de los consumidores o un medio proteccionista hacia los productores nacionales?

Globalmente, estas medidas están reguladas por el Acuerdo sobre la Aplicación de MSF y el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio. No obstante, el éxito de cualquier política de protección al consumidor – o la aplicación de barreras proteccionistas – depende de los procedimientos seguidos a nivel local o regional. Más específicamente, los países deben negociar rigurosos protocolos sanitarios bilaterales, y el acceso al mercado internacional cada vez más depende de la habilitación sanitaria – más que la mera reducción o eliminación arancelaria. Para los países en desarrollo, esta realidad significa no solo lidiar con costos crecientes, sino también crear y mantener sistemas institucionales avanzados.

En este sentido, acontecimientos como la crisis desencadenada por la Operación "Carne Fraca" en Brasil, con cierres inmediatos de mercados, resaltan la importancia de fortalecer las políticas sanitarias agrícolas de un país. En cambio, tiempos de crisis inspiraron a otros países de la región a reformar su política sanitaria. Por ejemplo, Uruguay ha apostado por una política pública de sanidad animal que comienza en la trazabilidad de la materia prima. La trazabilidad es uno de los nuevos requisitos demandados por mercados como China y solicitado en su reciente habilitación a la exportación de carne vacuna de Estados Unidos.

Estos eventos y desenlaces en productos emblemáticos de la región, como la carne vacuna, exigen cada vez más políticas, sistemas de monitoreo y respuestas institucionales que puedan evaluar de forma rápida y rigurosa si la medida es una exigencia legítima de los consumidores o un proteccionismo encubierto.

Mientras los países del Cono Sur siguen buscando el perfeccionamiento de sus políticas nacionales, hay que subrayar la ausencia de una política sanitaria agrícola regional en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Además de dificultar la armonización y la convergencia regulatoria entre los miembros del bloque, la ausencia de una política común imposibilita una negociación conjunta con terceros países. El mejor ejemplo es encontrado en la actual negociación entre el MERCOSUR y la Unión Europea.

A través de calificados invitados, la presente edición de Puentes introduce a esta temática de las barreras no arancelarias, la desarrolla y propone alternativas. Esperamos así, estimados lectores, promover el debate alentando a que las controversias señaladas se transformen en soluciones para la región.

El Equipo Puentes

MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS

Medidas sanitarias y fitosanitarias: ¿protección o proteccionismo?

Nelson Illescas

Desde una perspectiva comercial, el autor distingue las medidas sanitarias y fitosanitarias que buscan proteger al consumidor de aquellas que representan una protección encubierta para el país que las aplica. Las medidas son analizadas en los tres ámbitos de negociación principales de Argentina: bilateral, regional (MERCOSUR) y multilateral (OMC).

La supresión o reducción de las barreras arancelarias al comercio han llevado al surgimiento de otras preocupaciones comerciales y/o barreras no arancelarias (BNA), como las cuestiones sanitarias – sanidad en general, aunque pueden limitarse a la sanidad animal – y fitosanitarias – sanidad vegetal –, las cuales se encuentran reguladas a nivel multilateral por el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Visto desde la perspectiva del consumidor, se trata de acceder a alimentos inocuos. Pero desde la perspectiva de los productores, muchas veces se percibe que la razón que lleva a la aplicación de esta clase de medidas es el proteccionismo. Es decir, la finalidad es proteger a los productores locales más que a los consumidores, los animales o las plantas.

Esta es una problemática muy importante para los países en desarrollo productores de alimentos como los de América Latina, sobre todo cuando se busca acceder a los mercados de mayor poder adquisitivo.

Ahora bien, es evidente la necesidad de contar con medidas sanitarias y fitosanitarias para garantizar la inocuidad de los alimentos. No obstante, resulta importante distinguir entre aquellas que buscan proteger frente a riesgos legítimos y aquellas medidas que representan proteccionismo encubierto. En relación con Argentina, este artículo analiza los diferentes ámbitos en los cuales se pueden discutir estas preocupaciones comerciales y qué resultados pueden lograrse.

De esta manera, para el caso de Argentina, aunque también aplicable a la generalidad de los países, se consideran al menos tres ámbitos donde pueden abordarse estas cuestiones que afectan el acceso a terceros mercados de diversas formas: bilateral, regional y multilateral.

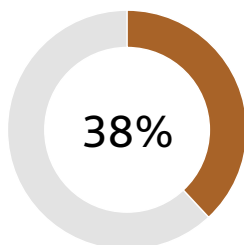
Bilateral

En materia bilateral, pueden tratarse las cuestiones sanitarias y fitosanitarias como un capítulo dentro de procesos de negociación más amplios de acceso a mercados, como son los acuerdos comerciales, o pueden atenderse preocupaciones específicas que surjan en un determinado momento y que generen trabas de acceso en el marco de Comisiones Mixtas o reuniones/misiones técnicas de los organismos sanitarios de ambos países.

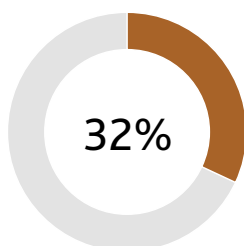
Al respecto, se debe diferenciar la actividad de promoción de acuerdos comerciales, muy acotada por la normativa del Mercado Común del Sur (MERCOSUR)●, de la de firma de protocolos y acuerdos específicos de acceso a mercados. En relación a esto último, se destacan los esfuerzos llevados adelante por el Ministerio de Agroindustria argentino y todas sus dependencias en lograr las denominadas reaperturas de mercados, que implican la firma y/o aplicación de protocolos de reconocimiento mutuo u otras formas de asegurar el acceso a los mercados por cumplimiento de requerimientos sanitarios o fitosanitarios.

En esta línea, por ejemplo, se enmarca el acercamiento con Japón que tuvo lugar en mayo de 2017, con el arribo del presidente Mauricio Macri a Tokio, donde se reunió con el primer ministro japonés, Shinzo Abe. Allí se firmó un Memorando de Cooperación en

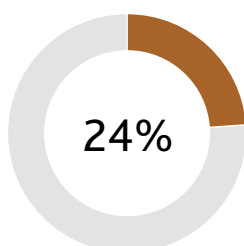
Preocupaciones específicas en el Comité MSF de la OMC (1995-2016)



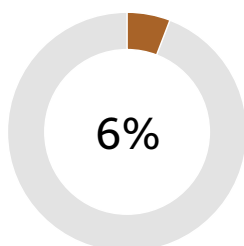
Sanidad animal y las zoonosis



Inocuidad de los alimentos



Sanidad vegetal



Otras cuestiones

Fuente: OMC (2017)

las Áreas Agrícola, Ganadera, Pesquera, Forestal y Agroindustrial entre los Ministerios de Agricultura de ambos países². Como resultado de la visita se espera una mayor apertura del mercado japonés para varios productos agroindustriales, como arándanos, cerezas, uvas, limones, peras, manzanas y carne bovina.

Asimismo, puede citarse el caso de China, donde también en mayo se firmaron tres nuevos instrumentos para profundizar los lazos bilaterales: un Plan de Acción Estratégico en Materia de Cooperación Agrícola (2017-2022), un Plan de Trabajo 2017-2019 para la Cooperación en Materia de Inocuidad, Sanidad y Seguridad Alimentaria y un Protocolo de Requisitos Fitosanitarios para la exportación de uvas de mesa³.

Por otra parte, y en un sentido más amplio, Argentina ha decidido profundizar una serie de acuerdos bilaterales que posee con países de Latinoamérica. Así, por ejemplo, se han venido celebrando desde noviembre de 2016 encuentros con México para ampliar y profundizar el Acuerdo de Complementación Económica N° 64. Se trata de un acuerdo vigente desde 1987, por el cual ambos países se conceden recíprocamente preferencias arancelarias en alrededor de 40% de las 12.000 líneas arancelarias que conforman el nomenclador. El objetivo ha sido avanzar en la reducción de aranceles, pero principalmente resolver cuestiones de acceso sanitario y fitosanitario.

En el mismo sentido, a principios de mayo se ha llevado a cabo la segunda ronda de negociaciones para un acuerdo de liberalización comercial entre Argentina y Chile. Desde hace 20 años el relacionamiento bilateral se rige por el ACE N° 35 entre Chile y MERCOSUR⁵. El nuevo acuerdo podría modernizar la relación incorporando nuevos temas, como comercio electrónico, servicios, compras públicas, facilitación de comercio, pequeñas y medianas empresas (PyMEs), temas laborales y ambientales y estándares fitosanitarios, además de dar certidumbre a las operaciones comerciales entre ambos países.

Regional

El nivel regional hace referencia al MERCOSUR, es decir, a las cuestiones de índole sanitaria y fitosanitaria que se atienden en el marco de las negociaciones intra- y extra-bloque. Cabe destacar que, al no contar el MERCOSUR con una política común en esta materia y atenerse a lo que dispone cada uno de los países miembros, se complejiza aún más la concreción de acuerdos extra-regionales.

Al respecto, la negociación más importante que está llevando a cabo el bloque sudamericano es aquella que busca lograr un Acuerdo de Asociación Bi-regional con la Unión Europea (UE). El mencionado acuerdo incluirá seguramente un capítulo de MSF que abordará la inocuidad alimentaria y la salud animal y vegetal.

Del análisis de los últimos tratados firmados por la UE – particularmente el Acuerdo Económico y Comercial Global⁶ (CETA, por su sigla en inglés) con Canadá –, surge que, para el tratamiento de las MSF, las partes disponen de obligaciones de notificación, la posibilidad de realizar consultas técnicas, y se prevé el establecimiento de un Comité Mixto de Gestión de MSF. Este último permite el intercambio de información, la resolución de problemas y el debate sobre modificaciones o propuestas de modificación de una MSF que se esté estudiando.

Otro de los capítulos/disciplinas que se encuentran en negociación en el marco del Acuerdo de Asociación es el desarrollo sostenible. En este aspecto, el sector privado ha tenido un rol activo y muy importante dado que tanto desde Argentina como a nivel regional se están llevando adelante iniciativas que buscan promover un desarrollo con tales características. En este sentido, vale mencionar el Seminario "El Desarrollo Sostenible y la Producción Agropecuaria" sobre la negociación entre MERCOSUR y la UE, organizado por la Fundación Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI), la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Confederación de Agricultura y Pecuaria de Brasil (CNA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Las MSF en el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC

46

casos que citan violaciones al Acuerdo MSF

10%

porcentaje sobre el total de casos presentados al Órgano

Como resultado del citado evento, las entidades firmaron una declaración conjunta a través de la cual reconocen la necesidad de producir alimentos inocuos y nutritivos de una manera sostenible y resaltan la importancia de que "el desarrollo sostenible sea una meta conjunta y no sea utilizado como una traba injustificada al comercio internacional".

El acuerdo con la UE sentaría las bases para que el MERCOSUR luego pueda encarar negociaciones con otros actores relevantes para el comercio internacional. De hecho, el bloque se encuentra en proceso de negociar una ampliación del Acuerdo de Preferencias Fijas con la India, al tiempo que se sondea la posibilidad de negociar otros instrumentos con Canadá, Corea del Sur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por su sigla en inglés).

Multilateral

Por último, el ámbito multilateral debe considerarse desde una doble perspectiva: como ámbito para el monitoreo de reglas comerciales existentes y la discusión de nuevas, incluidas las MSF y los estándares privados, y para tratar la eventual solución de diferencias comerciales que involucren dichas temáticas.

En el primer caso, el Acuerdo sobre MSF de la OMC establece las reglas básicas que deben aplicar los gobiernos para garantizar la inocuidad de los alimentos, la salud de los animales y la preservación de los vegetales. La labor del Comité MSF consiste en vigilar la manera en que los países aplican el mencionado Acuerdo y debatir sobre cuestiones que pueden surgir de su aplicación.

En efecto, el Comité ha solicitado a la Secretaría que elabore un documento⁷ para que se resumieran las preocupaciones comerciales específicas que se habían señalado a la atención del Comité desde 1995. En el mismo se indica que entre 1995 y el final de 2016, se han planteado 416 preocupaciones comerciales específicas, en materias como inocuidad de los alimentos y sanidad animal o vegetal. Sobre el total, el 38% de dichas preocupaciones se relacionan con la sanidad animal y las zoonosis, el 32% guardan relación con la inocuidad de los alimentos; el 24% con la sanidad vegetal y el 6% están relacionadas con otras cuestiones, como las prescripciones de certificación y los procedimientos de control o inspección.

Este ámbito ha permitido resolver algunas cuestiones, mediante la notificación de las MSF nacionales y posterior discusión de estas entre las partes interesadas. Luego, ante la eventual dificultad para una resolución consensuada, está a disposición el Órgano de Solución de Diferencias (OSD), como instancia jurisdiccional internacional.

En esta línea – es decir, lo relativo a controversias comerciales –, las cuestiones relacionadas a MSF han abarcado menos de 10% del total de reclamaciones presentadas⁸. Sin embargo, para Argentina ha sido un ámbito que le ha permitido lograr victorias importantes⁹.

En los últimos años, se puede destacar el fallo en materia de carnes contra Estados Unidos. Esto se remite a 2001, cuando tras varios casos de fiebre aftosa en Argentina, Estados Unidos aplicó una prohibición a la importación de carne de origen argentino. Entre 2002 y 2011, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) fue devolviendo el estatus de libre de la enfermedad con vacunación a diversas regiones del país.

Ante esta situación, Argentina pidió el establecimiento de un panel para que revisara la prohibición de importación estadounidense, citando dudas sobre la justificación científica y la concordancia con los estándares internacionales. Además, se informó de retrasos indebidos en la aprobación de importación de carne fresca y en el reconocimiento de la Patagonia como región libre de la enfermedad. Para julio de 2015 se conoció el fallo de la OMC, el cual resultó favorable a Argentina, puesto que el OSD concluyó que la prohibición de Estados Unidos no se encontraba basada en estándares internacionales válidos.

Algunas consideraciones finales

La búsqueda de un equilibrio entre un nivel adecuado de protección y la tentación del proteccionismo no es sencilla. Al respecto, se han destacado a lo largo de este artículo diversas instancias o ámbitos en los cuales un país como Argentina puede canalizar sus preocupaciones comerciales.

Más que excluyentes, se trata de ámbitos perfectamente complementarios. Así, la OMC establece el conjunto normativo mínimo e indispensable que los países deben aplicar, junto a un sistema de monitoreo (Comité MSF) y un OSD, que hacen a la transparencia y cumplimiento del Acuerdo MSF. Luego, los acuerdos comerciales regionales permiten el establecimiento de los Comités Mixtos, que facilitan la rápida resolución de conflictos. Y por último, los protocolos bilaterales, ya específicos para productos, permiten establecer los requisitos necesarios para asegurar la seguridad de los consumidores y el acceso para los productores.

Como se resaltó, el MERCOSUR no posee una política sanitaria y fitosanitaria común: negociar con el bloque implica negociar con cuatro territorios distintos. Lograr una unificación – para nada simple – de esta política permitiría facilitar notablemente las negociaciones e incluso dotaría de mayor poder de negociación respecto de la firma de protocolos de manera individual.

- ❶ Decisión 32/00 del Consejo del Mercado Común. Por su Artículo 1, se reafirma el compromiso de los miembros del MERCOSUR de negociar en forma conjunta acuerdos de naturaleza comercial con terceros países o agrupaciones de países extrazona en los cuales se otorguen preferencias arancelarias.
- ❷ Disponible en: <<http://bit.ly/2uGT7eZ>>.
- ❸ Los tres documentos están, respectivamente, disponibles en: <<http://bit.ly/2vAhqHy>>; <<http://bit.ly/2vgHYhl>>; y <<http://bit.ly/2te1MRB>>.
- ❹ Disponible en: <<http://bit.ly/2fLmAJR>>.
- ❺ Disponible en: <<http://bit.ly/KgXsdy>>.
- ❻ El CETA aún necesita de la aprobación de los respectivos parlamentos de los miembros de la UE para que entre en vigor.
- ❼ Véase: G/SPS/GEN/204/Rev.17.
- ❽ De 525 solicitudes de consulta en la OMC, 46 han citado violaciones al Acuerdo MSF.
- ❾ Véase: Comunidades Europeas — Medidas que afectan a la aprobación y comercialización de productos biotecnológicos (DS293).



Nelson Illescas
Director de INAI, Argentina.

DEFENSA AGROPECUARIA

La Operación “Carne Fraca” y el debate sobre defensa agropecuaria en Brasil

Eduardo Vieira

Tras la crisis desencadenada por la Operación “Carne Fraca” en Brasil, el experto resalta los principales elementos a tener en cuenta a la hora de fortalecer la defensa agropecuaria a través de la legislación pública y el rol del sector privado en este proceso.

La repercusión de la Operación “Carne Fraca”, desencadenada por la Policía Federal el 17 de marzo de 2017, generó una rápida respuesta por parte del gobierno brasileño, promulgando el Decreto No. 9.013, de 29 de marzo de 2017, que actualiza el Reglamento de la Inspección Industrial y el Reglamento Sanitario para Productos de Origen Animal (RIISPOA), y la Medida Provisional No. 772, de 29 de marzo de 2017, que actualiza la multa administrativa debida en caso de infracción a la legislación vigente sobre productos de origen animal.

Sin embargo, la agilidad del gobierno no fue suficiente para ahuyentar las consecuencias de la Operación. Recientemente, Estados Unidos suspendió la importación de carne *in natura* proveniente de Brasil hasta que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés) adopte las medidas correctivas que considere satisfactorias.

Según el ministro brasileño de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, la suspensión se debió a la detección de abscesos en algunos cortes, posiblemente originados por reacciones a la vacuna contra la fiebre aftosa. A pesar de que la suspensión de las importaciones no tiene relación directa con los hechos relatados en la Operación “Carne Fraca”, la decisión llegó como resultado de una inspección más rigurosa de la carne brasileña por parte de la autoridad sanitaria estadounidense, que sí fue motivada por la repercusión pública generada por esta Operación¹ y por las presiones comerciales presentes en mercados altamente competitivos y regulados².

Esta crisis evidencia la relevancia de las actividades de inspección de los productos de origen animal y sus peculiaridades. Además, pone de relieve la necesidad del debate sobre las oportunidades de mejora de esta política pública, cuyo buen funcionamiento es esencial para la industria cárnica y su prospección de mercados.

Defensa agropecuaria e inspección de productos de origen animal en Brasil

La defensa agropecuaria engloba un conjunto de acciones cuya finalidad es asegurar la salud de los rebaños, la sanidad de los cultivos, la idoneidad de los insumos y de los servicios utilizados en la agropecuaria, así como la identidad y la seguridad higiénico-sanitaria y tecnológica de los productos agropecuarios finales destinados al consumidor. Con este objetivo, el poder público desarrolla las siguientes actividades: i) vigilancia y defensa sanitaria vegetal y animal; ii) inspección y clasificación de productos de origen vegetal y animal, sus derivados, subproductos y residuos de valor económico; y iii) fiscalización de los insumos y de los servicios utilizados en las actividades agropecuarias.

En el ámbito federal, hay cerca de tres mil servidores dedicados a la fiscalización, auditoría, supervisión, inspección y control de las actividades agropecuarias³. Por su parte, los estados de la federación cuentan con más de 11 mil servidores actuando en el área, siendo 5.300 fiscales, 4.500 técnicos y 1.300 auxiliares⁴.

A pesar de la amplia cobertura y del gran contingente involucrado en la ejecución de esta función, los hechos relatados en la Operación “Carne Fraca” señalan un aspecto de esa política pública extremadamente sensible: la propia inspección industrial y sanitaria de los productos de origen animal. Sensible, porque la inspección tiene como uno de sus

La fiscalización en las actividades agropecuarias en Brasil

3.000

funcionarios federales

11.000

funcionarios estatales

principales valores la confianza que es depositada en el acto de inspección, la cual resultó vulnerada en este episodio; pero además, debido a su gran relevancia por ser una actividad esencial para el funcionamiento de una industria que facturó R\$ 133 mil millones en 2016⁵.

El papel de la legislación

El servicio público de inspección es esencial para cualquier país que aspire a una inserción internacional relevante en el mercado de productos de origen animal. La Organización Mundial para la Salud Animal (OIE) recomienda que estos servicios gocen de independencia, imparcialidad y mantengan su integridad en la ejecución de sus actividades. Además, considera que la legislación veterinaria es un elemento esencial para la buena gobernanza y la estructura institucional de los servicios veterinarios públicos.

Si bien la legislación primaria no trata sobre detalles de la ejecución de los servicios de inspección – que, por su carácter minucioso, deben ser abordadas por normas sin rango legal –, las decisiones legislativas que conforman el marco institucional de los servicios públicos veterinarios pueden tener impactos significativos sobre la forma en que estos servicios se ejecutan y sobre cómo son percibidos en cuanto a su eficiencia y confiabilidad.

Propuestas en trámite en el Congreso Nacional

Más de 40 proyectos de ley que tratan sobre la política de defensa agropecuaria están en tramitación en el Congreso Nacional. Muchos de ellos abordan cuestiones principalmente técnicas y promueven cambios puntuales en la legislación; otros, buscan implementar cambios en la estructura institucional del sector, principalmente en el área de inspección de productos de origen animal.

Entre los posibles aspectos institucionales a ser abordados por la legislación primaria se pueden destacar: i) la división de competencias entre los entes a nivel federal; ii) la existencia de una única norma para todos los entes o el establecimiento de una preferencia por la autonomía federal; iii) la actuación exclusiva del sector público o la apertura de la actividad de inspección para el sector privado; y iv) los medios de financiación de las actividades de defensa agropecuaria.

Cooperación federal y protocolos de inspección

La división de competencias sobre la inspección de productos de origen animal entre los entes de la federación está organizada por la Ley No. 1.283 de 1950, que atribuye: a la Unión, la inspección en establecimientos⁶ que realicen comercio interestatal o internacional; a los estados y al Distrito Federal, en los establecimientos con comercio intermunicipal; y a los municipios, en establecimientos que sólo comercializan sus productos dentro de un mismo municipio.

A este respecto se encuentra en la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley (PL) No. 1.142 de 2003, que permite a los entes municipales inspeccionar establecimientos con comercio intermunicipal, y el PL No. 334 de 2015, que extiende tanto la competencia de municipios como la de los estados, posibilitando la inspección de establecimientos que comercialicen también productos a nivel nacional.

Además de la cuestión administrativa, hay otras discusiones subyacentes vinculadas a la distribución de competencias en las actividades de inspección. Una de ellas se refiere al hecho de que las normas de inspección empleadas por estados y municipios son consideradas más blandas que aquellas establecidas por el Servicio de Inspección Federal (SIF). La ampliación de la competencia de los estados y municipios traería, por lo tanto, un aumento del volumen de productos destinados al mercado doméstico inspeccionados bajo un protocolo menos riguroso, con respecto a aquel que obligatoriamente debe ser utilizado para los productos destinados a la exportación.

Otra discusión vinculada a la cooperación federal se refiere a la elección sobre la utilización de un protocolo único de inspección para toda la producción industrial de origen animal, o por la segregación de los procedimientos en razón del mercado al que se destina el producto, sea nacional o internacional. Debido a la relevancia internacional de Brasil en

Principales importadores de carne bovina brasileña

1. Hong Kong
2. China
3. Arabia Saudita
4. Rusia
5. Japón

Fuente: MAPA (2016)

ese mercado, el SIF se encuentra apto para atender los requisitos de los mercados más exigentes del mundo. Sin embargo, cuanto más rígido sea el protocolo de inspección, mayores serán los costos de producción y mayores las barreras a la entrada de nuevos competidores en el mercado. En consecuencia, reflexionar sobre la conveniencia de la adopción de protocolos de inspección diferentes para productos destinados al mercado doméstico y al exterior se vuelve extremadamente relevante.

Si bien esta segregación no existe en Brasil, los entes sub-nacionales desempeñan, en la práctica, la función de gestionar protocolos de inspección menos exigentes para los productos comercializados en el país, debido a la relativa autonomía que poseen para establecer normas más flexibles en relación al SIF. La aprobación de los proyectos en cuestión podría resultar, por lo tanto, en una mayor utilización de protocolos de inspección distintos a los del SIF.

¿Inspección pública o privada?

El Proyecto de Ley del Senado (PLS) No. 326 de 2016 conceptualiza la auditoría y la inspección sanitaria. De acuerdo con los dispositivos previstos en esta propuesta, mientras que la auditoría sanitaria sería ejercida por el Poder Público, de forma privativa y no delegable, la inspección sanitaria podría ser realizada tanto por el Poder Público como por una entidad privada o por profesionales habilitados, acreditados de acuerdo con lo que establece el reglamento.

Sin embargo, la experiencia de Australia en la implementación de protocolos de inspección, que prevé una mayor participación de agentes privados en la inspección de frigoríficos, indica que la privatización de la inspección no es una tarea simple. A pesar de que el servicio de inspección estadounidense confirmó la equivalencia⁷ del sistema australiano tras una auditoría realizada entre 2007 y 2008, un procedimiento posterior, llevado a cabo en 2012 por la Unión Europea (UE), concluyó que el modelo adoptado por Australia no cumplía con los requisitos de la norma europea, ya que las inspecciones oficiales no podrían ser hechas por personal contratado directamente por la propia compañía a ser inspeccionada.

A partir de esta auditoría, aunque la inspección *ante-mortem* y la supervisión de la inspección *post-mortem* fueran ejecutadas por un veterinario del Departamento de Agricultura y Recursos Hídricos del gobierno australiano, Australia se vio obligada a desarrollar un sistema de "acreditación" en que una tercera parte realiza el papel de entidad certificadora privada, acreditada por el gobierno, siendo responsable por la contratación de los demás agentes de inspección – medida que busca mitigar el riesgo potencial de conflicto de intereses.

Financiamiento de las funciones de defensa agropecuaria

El Plan Estratégico del Programa Nacional de Erradicación y Prevención de la Fiebre Aftosa (PNEFA) para el período 2017-2026 prevé la adopción de una estrategia cuyo objetivo es el establecimiento de una zona libre de fiebre aftosa para todo Brasil hasta 2023, con un relevante impacto sobre la cadena productiva de la carne. Para su sostenibilidad financiera, el Plan sugiere medidas como: i) una mayor previsibilidad de los mecanismos de transferencia de recursos en la esfera pública; ii) transferencias voluntarias basadas en criterios transparentes y equilibrados; iii) aumento de las fuentes de financiación a través de la cobranza por la prestación de servicios; y iv) delegación de los servicios que no sean exclusivos de los servicios veterinarios oficiales.

Con respecto a este tema, el PLS No. 379 de 2016 modifica el traspaso de recursos federales para apoyar las acciones de defensa agropecuaria a los estados, al Distrito Federal y a los municipios y tiene por objetivo instituir un mecanismo de transferencia directa de recursos presupuestarios de la Unión, sin necesidad de celebrar convenios específicos.

Aunque esta propuesta no representa una solución a la cuestión del volumen de los recursos presupuestarios que pueden ser destinados a la defensa agropecuaria y tampoco

innova sobre las fuentes de financiamiento, este proyecto busca desburocratizar la transferencia de los recursos y establecer una mayor previsibilidad del cronograma de liberación, de modo que las acciones descentralizadas soportadas por el presupuesto federal no sufran interrupciones.

Consideraciones finales

La defensa agropecuaria es una política compleja, que engloba diversos objetivos y actividades. El gran número de proyectos de ley siendo discutidos en el Congreso Nacional denota que el debate sobre esta política pública es constante.

Las proposiciones legislativas en trámite pueden influir en la forma en que la actividad de inspección de productos de origen animal se realiza en el país, con consecuencias directas sobre el costo de producción, el nivel de concentración de mercado de este sector, la confiabilidad del sistema y la competitividad e inserción internacional de la cadena productiva de la carne brasileña.

Sin embargo, es importante destacar que el SIF goza de una amplia credibilidad construida a lo largo de un siglo de actuación, con una participación decisiva en el crecimiento del agronegocio brasileño, de modo que cambios significativos en el sistema no deben ser adoptados sin esta debida consideración.

- ❶ Véase nota del USDA de 22 de marzo de 2017, que anuncia la re-inspección de la totalidad de los productos cárnicos de origen brasileño, considerando las recientes investigaciones que involucran la industria frigorífica de Brasil. Disponible en: <<http://bit.ly/2sRR0Aj>>.
- ❷ Las declaraciones del secretario de Defensa Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA) están disponibles en: <<https://glo.bo/2rZpynC>>.
- ❸ Datos relativos a los recursos humanos del MAPA que constan en el Plan de Defensa Agropecuaria. Disponible en: <<http://bit.ly/2ukoplo>>.
- ❹ De acuerdo con los datos de 2015 de la Unión Nacional de Fiscales Agropecuarios (UNAFA), presentados en audiencia pública de la Comisión de Agricultura y Reforma Agraria del Senado Federal, realizada el 17 de septiembre de 2015.
- ❺ De acuerdo a los datos de la Asociación Brasileña de Industrias de la Alimentación (ABIA) para el sector de carnes y sus derivados. Disponible en: <<http://bit.ly/2uSNQNY>>.
- ❻ Establecimientos industriales de sacrificio de animales y propiedades rurales, almacenes y fábricas de pescados, productos lácteos y almacenes de lácteos y derivados, depósitos de huevos y derivados etc.
- ❼ La evaluación de la equivalencia de los servicios de inspección es un procedimiento necesario para la exportación o importación de productos de origen animal. Más específicamente, la evaluación consiste en el reconocimiento de que las medidas sanitarias aplicadas por el país exportador ofrecen garantías equivalentes a las aplicadas en el país importador.



Eduardo Vieira

Consultor legislativo del Senado Federal en el Núcleo de Economía (área de Agricultura). Licenciatura en Ciencias Económicas (2004) y en Ciencias Jurídicas (2014) y especialista en Gestión de Asuntos Públicos (2005) y Derecho Legislativo (2016).

TRAZABILIDAD

Trazabilidad bovina: un caso de éxito en Uruguay

María Nela González

Como un ejemplo a nivel mundial con 100% de trazabilidad en la ganadería vacuna, la autora describe la evolución y los beneficios del sistema institucional de trazabilidad diseñado en Uruguay en términos ambientales, productivos y de inserción internacional, definido como una política de Estado hace más de 15 años.

El proyecto de Identificación Animal, Registro y Trazabilidad surge en el año 2003 luego de la crisis sanitaria del 2000, como consecuencia de la reintroducción de la fiebre aftosa. Frente a este episodio, Uruguay optó por hacer pública la denuncia y rever los contratos de compradores y potenciales importadores de carne. En ese momento, el gobierno era consciente de las consecuencias inmediatas de esta decisión: la pérdida de condición de país libre de fiebre aftosa sin vacunación, que permitía vender al mercado de los tres países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por su sigla en inglés) como abastecedor.

Esta crisis de confianza fue rápidamente superada, al desencadenar una estrategia muy clara de control de la enfermedad, acompañada del fortalecimiento institucional por parte de la autoridad sanitaria competente.

De las prioridades definidas y consensuadas, surgía la necesidad de enfocar los esfuerzos iniciales a la gestión de la información básica, responsabilidad del Estado, sobre los animales identificados y sus transacciones. Paralelamente, se trabajó en establecer una genuina integración con operadores privados especializados y grupos de productores que desearan maximizar el uso de la información de tipo productivo. El objetivo de las acciones era responder a las crecientes exigencias de los mercados en lo referente a salud animal, seguridad alimentaria y trazabilidad - siempre con la mira puesta en la orientación de la inversión tecnológica a reforzar los atributos propios de Uruguay: producción natural, salud animal, confianza de los mercados y teniendo en cuenta la brecha tecnológica existente en la heterogeneidad de los destinatarios y la normativa vigente. Además, es muy importante reconocer que nunca se ha dejado de mirar hacia el interior del país en ese proceso.

Con el avance del proyecto desde su consolidación institucional, adquiriendo prioridad absoluta como política pública, la crisis sanitaria se convirtió en una oportunidad de innovación en su máxima expresión.

Hasta el año 2000, Uruguay logró acceso a 76 mercados de mediana y moderada exigencia, así como a terceros países. A partir del 2005, otros mercados fueron gradualmente abiertos - como Estados Unidos, Canadá, Rusia y Unión Europea (UE) - y el país recuperó la Cuota Hilton (6.300 toneladas). Para el caso último, se debe demostrar que los animales faenados nacieron y se criaron con pasturas naturales, a cielo abierto y sin suplementación. Es demostrable - y por tanto auditable - por el sistema de Identificación Animal, Registro y Trazabilidad.

Para el 2013, se logra acceder a la Cuota 481, que no tiene barreras arancelarias, tampoco es una cuota a cada país: hay un acceso de 48.200 toneladas, que se importan desde países como Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Uruguay, de manera que cada país provee de la cantidad de carne que negocie con los particulares. En ese mismo año, Uruguay logra acceder al mercado de Corea del Sur. En el 2014, se obtuvo el acceso a la cuota Suiza, de características y exigencias similares que la Cuota 481, en cuanto al estatus de trazabilidad que deben tener los animales. Deben ser faenados a los 30 meses de edad y demostrar que, los 100 días previos a su faena, estuvieron en encierro a corral siendo alimentados con silos de granos húmedos. En ambos casos, los protocolos de certificación tienen matices y están muy bien diferenciados por el sector privado, tanto

Los números del sector de carne en Uruguay

Producción anual

**550.000
toneladas**

Exportaciones

**370.000
toneladas**

Participación en las exportaciones del país

25%

Fuente: INAC (2017)

a nivel primario como industrial. Actualmente, Uruguay mantiene 140 mercados abiertos a su carne bovina, subproductos y carne ovina⁹.

Un dato que demuestra la consolidación del sector ganadero es el crecimiento constante de la producción de carne vacuna en los últimos 6 años. En 2016 creció un 7%, con aumento en los censos pecuarios de cerca del 6%, así como un ascenso fuerte en las exportaciones de ganado en pie. El sector cárnico representa el 25% del producto interno bruto (PIB) en materia de exportaciones, y el país exporta 78% de su producción.

El fortalecimiento de los sistemas productivos tanto a nivel primario como industrial ha sido necesario para lograr una genuina inserción internacional, con la consolidación de mercados abiertos y apertura de nuevos mercados. Se ha logrado cumplir normas internacionales en cuanto al estatus sanitario del país y bienestar animal, mecanismos de respuesta rápida como prevención en materia de salud animal, la inocuidad de los alimentos demostrada a través de procesos de certificación, entre otros requisitos. Ello ha generado una transformación de la matriz productiva.

Esta matriz productiva refleja los lineamientos estratégicos que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay ha definido en los últimos años como meta. Además de la inserción internacional inteligente, que se refiere a la diferenciación con una nueva visión de la competitividad y posicionamiento de diferenciación, la estrategia fijada significa no necesariamente vender más caro, sino poder vender. Se apuesta a la intensificación de la producción, respetando la sostenibilidad de los recursos naturales, con el valor agregado ambiental o servicios eco sistémicos, con impactos ambientales positivos en los recursos naturales utilizados en los procesos de producción.

En esa lógica, buscar una proyección como un proveedor confiable de alimentos en términos de cantidad, calidad, inocuidad, sanidad, con diferenciación de los productos del país, requiere más que pronunciar la intención. Hay que demostrar el conocimiento, la gestión de riesgos, la certificación, la normativa, la fiscalización, el control y la evaluación de los riesgos.

Es una política de Estado que trasciende a los periodos de gestión de cada gobierno, fundamentada en la articulación público-privada, con la preocupación de buscar una adecuación a estándares establecidos, y no por las exigencias impuestas por los mercados. Tales procesos resultan del desarrollo por el país de mecanismos vinculados a la investigación, la producción de conocimiento y la transferencia tecnológica.

Como resultado de Estado procesos intensos y graduales, la imagen del Uruguay rural cambió sustancialmente en la última década. En el sector ganadero, la incorporación de tecnologías, el manejo reproductivo que apuesta a la genética de alta calidad y el manejo del rodeo con el objetivo de obtener mayores rendimientos en extracción por hectárea han resultado en la producción de una carne de alta calidad en cuanto a la distribución de grasa y rapidez en el desarrollo, bajando la edad de faena de 6 a 2,5 años. Otro aspecto a destacar es la relación de precios favorables al criador, lo que estimula a fortalecer su rodeo genéticamente y a lograr un ternero por vaca por año. En síntesis, la pecuaria uruguaya presentó, a lo largo de la última década, mejoras significativas en materia de eficiencia. Esta relación de paridad ternero/novillo gordo nunca había logrado estar equiparada en la historia de la ganadería uruguaya.

Las instituciones agropecuarias de Uruguay ya tienen una larga tradición: son más de cien años de historia. Esta cultura fortalece la gestión y, por consiguiente, el éxito de esta política pública – en particular con la articulación y las sinergias interinstitucionales entre gobierno, gremiales de productores, industriales, profesionales y academia. Así, cuando es necesario intensificar la producción de manera sostenible como tercer eje o meta estratégica, actores públicos y privados enfrentan, en conjunto, desafíos relacionados a producción y medio ambiente, producción y calidad del agua, producción e inocuidad alimentaria. Esas dificultades son enfrentadas y resueltas de manera exitosa, con un sistema robusto de información, que posibilita la trazabilidad desde el campo al plato.

En un antecedente reciente, en 2016, fueron identificados trazas del zooterápico Ethion en contenedores de carne que tenían como destino Estados Unidos. Este país no admite la presencia del mencionado zooterápico, no por razones asociadas a la inocuidad alimentaria, sino a la manera con la cual el producto es manipulado. En Estados Unidos, la circulación de Ethion está prohibida. En contraste, los estándares internacionales establecen un nivel mínimo de presencia de Ethion en alimentos: 2.500 partes por mil millones (ppb, por su sigla en inglés). En los contenedores mencionados, se detectaron 45 ppb. Frente al evento, Uruguay adoptó medidas correctivas: suspendió temporariamente la planta de faena de dónde provenía la carne cuestionada; y realizó la traza hacia los establecimientos ganaderos que habían remitido animales sin respetar los tiempos de espera reglamentarios. También suspendió la importación, producción, distribución y venta de Ethion en el territorio nacional.

Al mismo tiempo, las máximas autoridades participaron en la definición de las medidas a implementar, con el objetivo de prevenir este tipo de eventos en el futuro. Es así que, para diciembre de 2016, quedó operativo un sistema de fármaco-vigilancia con alcance a garrapaticidas y mosquicidas, montado sobre el modelo de datos de la identificación animal, registro y trazabilidad, en el cual entidades públicas y privadas participan activamente del diseño, implantación y ejecución. Un sistema flexible y escalable, que a la brevedad incorporará antibióticos, hormonales y otros fármacos registrados y habilitados para el uso animal. Nuevamente, la articulación y sinergias interinstitucionales han trabajado en defensa de los objetivos comunes, más allá de los intereses particulares. En un período de seis meses, Uruguay mostró credibilidad, rapidez en la reacción, seriedad, fortaleza institucional y responsabilidad.

Una vez más, no solo buscamos atributos de características organolépticas para nuestros productos cárnicos: apostamos a la calidad en su máxima expresión, agregando valor en materia de información, que de seguridad a los consumidores más exigentes que existen y que seguirán existiendo y exigiendo. Envasamos naturaleza y exportamos confianza.

❶ Cabe aclarar que la apertura a la carne bovina puede ser extendida a otras carnes porque las normas sanitarias rigen para otras especies.



María Nela González
Directora del Sistema Nacional
de Información Ganadera
del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca de Uruguay.

MERCOSUR

Unidad regional de análisis de riesgo sanitario para alimentos en el MERCOSUR

Gustavo Idígoras

Dentro de los sistemas de control y certificación de alimentos inocuos, el análisis de riesgo es una de las principales herramientas para brindar garantías de inocuidad y sanidad a los países compradores. En este artículo, el autor propone la creación de una unidad regional de análisis de riesgo sanitario para alimentos en el MERCOSUR.

El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) es el bloque económico exportador neto de alimentos por excelencia y, por lo tanto, su capacidad de acceso a mercado es la principal variable del progreso de sus economías. El ingreso de los países en desarrollo como los del MERCOSUR al mercado internacional de alimentos ha enfrentado obstáculos múltiples. En la actualidad, las barreras técnicas al comercio, particularmente las medidas sanitarias y fitosanitarias, se han convertido en un grave problema para las economías de los países en desarrollo y forman parte de la agenda permanente de los países de la región.

Todos los países del mundo tienen una estructura gubernamental encargada de velar por la sanidad animal, vegetal y la inocuidad de los alimentos. El grado de desarrollo, magnitud y funciones depende del tamaño del territorio, de su población y de las características del país en materia de aprovisionamiento propio o extranjero de sus necesidades alimenticias.

En general, los países menos adelantados tienen estructuras reducidas y a veces deficitarias. En casos de un mayor grado de desarrollo, las organizaciones gubernamentales crecen en tamaño y funciones, llegando a ocupar la posición de líderes globales que impulsan modificaciones reglamentarias e innovaciones tecnológicas en materia de control y certificación vía los organismos internacionales de referencia.

En ese sentido, es razonable afirmar que existe una relación directa entre grado de desarrollo económico y fortalecimiento del control de alimentos. Sin embargo, la condición de país importador o exportador neto de alimentos también influye en el formato del sistema nacional de control de inocuidad de alimentos. Para el caso específico del MERCOSUR, es imprescindible contar con sistemas sólidos de control y certificación de alimentos inocuos.

Por otra parte, existen legislaciones diferentes sobre los controles de alimentos en cuanto a la forma de intervención de las autoridades competentes, pero siempre encontramos al menos una autoridad nacional que interviene en materia regulatoria para los temas de sanidad animal y vegetal e inocuidad de alimentos. Algunos organismos también tienen competencias en materia de calidad de alimentos y de la protección de flora y fauna. En adición, los países federales poseen legislaciones indelegables en materia de control de sanidad e inocuidad en sus regiones, autonomías o provincias, incluyendo intervenciones a nivel municipal en algunos casos.

Si bien existen grados diferentes de intervención a nivel nacional, regional y local en cada país, así como organismos independientes en materia de sanidad animal, protección vegetal e inocuidad, igualmente resulta justo hablar de un sistema nacional de control de la inocuidad de alimentos y bebidas. Sin dejar de lado estos diferentes diseños institucionales y constitucionales, un sistema nacional de control y certificación de alimentos debe velar por la seguridad de los consumidores, la salud de los animales y las plantas. En ese sentido, la herramienta más relevante de los sistemas nacionales es el análisis de riesgo – condición *sine qua non* para brindar garantías de inocuidad y sanidad a los países compradores.

Son múltiples las dificultades que se presentan para poder instrumentar los análisis de riesgo, y con éstos aportar las bases científicas que permitan el ingreso de productos

Exportaciones totales de carne
bovina de Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay

1983

**US\$ 700
millones**

2013

**US\$ 8,3 mil
millones**

Fuente: Labraga (2016)

al mercado internacional y la defensa de barreras técnicas que pueden restringir su comercialización. Entre tales dificultades, se destaca la ausencia de un marco normativo y de recursos humanos capacitados.

Además, son escasas las informaciones estadísticas, económicas y científicas que permitan atender las particularidades de los casos. Muchas veces la información se encuentra dispersa e inconexa, por lo que se debería tender a conformar una red que acerque los datos generados por diferentes centros de investigación a lo largo de los países y, de esta forma, hacer uso racional de la misma.

Una tercera dificultad está relacionada a la naturaleza intergubernamental del MERCOSUR. Las decisiones, resoluciones y directivas, que tienen el carácter obligatorio para los miembros del bloque, no generan directamente derechos y obligaciones sobre las personas físicas y jurídicas residentes en el área del MERCOSUR. Así, los actos jurídicos deben ser incorporados por los ordenamientos jurídicos nacionales mediante los procedimientos previstos por la legislación de cada país.

La demanda mundial de alimentos crecerá significativamente en los próximos años y es el MERCOSUR una zona estratégica para dar respuesta a este desafío de seguridad alimentaria. Para hacerlo, debe lograr reconocimiento de sus sistemas de control y certificación sanitaria y de inocuidad de alimentos por parte de los países importadores. Debido a las debilidades nacionales en materia de desarrollo de evaluaciones de riesgo sanitario, es esencial articular una estrategia regional que promueva un ámbito común técnico-científico y genere la información sanitaria necesaria para abrir mercados, reducir tiempos de evaluaciones en terceros países, mantener abiertos mercados con exigencias elevadas, promover recomendaciones en los organismos de referencia internacional y colaborar en el posicionamiento técnico en los foros multilaterales y en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El objetivo de esta propuesta es apoyar el proceso de integración al mundo de la agroindustria de los países del MERCOSUR sobre la base de la excelencia técnica con justificación científica. Para ello, se esperan los siguientes resultados:

Resultado 1

Contribuir en el diseño de la creación de un programa regional de análisis de riesgo en el MERCOSUR, que incluya modelos de análisis de riesgo para los productos prioritarios identificados con miras a su exportación al mundo.

Resultado 2

Colaborar en el diseño de un mecanismo de coordinación regional necesaria para la evaluación de riesgo fitosanitario, sanitario y de inocuidad de los alimentos, apoyando a las unidades de riesgo nacionales y generando una red de trabajo regional, sobre la base de información compartida.

[MERCOSUR] debe lograr reconocimiento de sus sistemas de control y certificación sanitaria y de inocuidad de alimentos por parte de los países importadores. Debido a las debilidades nacionales en materia de (...) evaluaciones de riesgo sanitario, es esencial articular una estrategia regional

Exportaciones de carne en 2016 (toneladas métricas)

Brasil

1.850.000

Paraguay

390.000

Uruguay

385.000

Argentina

210.000

Fuente: USDA (2017)

Resultado 3

Brindar asistencia al Comité de Sanidad Vegetal (COSAVE) y al Comité Veterinario Permanente del Cono Sur (CVP) en sus agendas regionales estratégicas en temas relativos a análisis de riesgo.

Resultado 4

Promover aperturas de mercados mediante el uso de evaluaciones de riesgo sanitario que favorezcan las aprobaciones sanitarias en países compradores de alimentos del MERCOSUR.

Resultado 5

Fortalecer las posiciones técnicas en el Codex Alimentarius, la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por su sigla en inglés), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), así como la defensa de los intereses comerciales en la OMC.

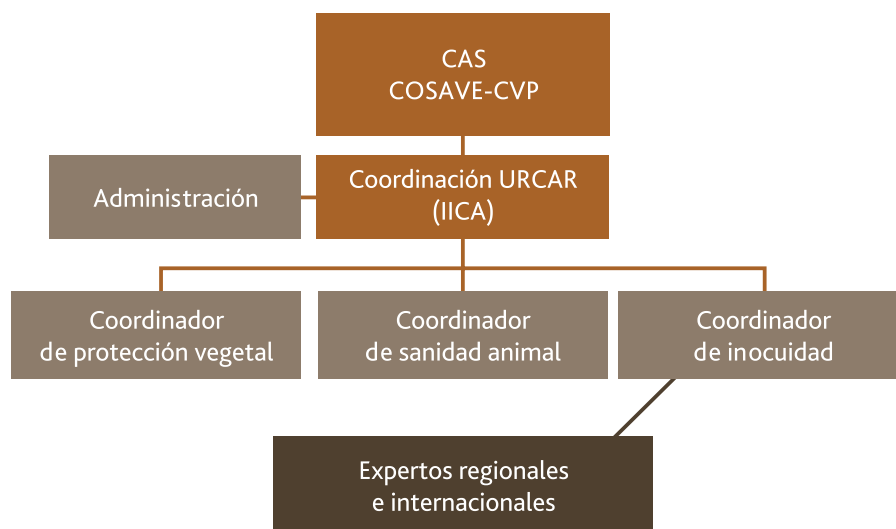
La Unidad Regional de Coordinación de Análisis de Riesgo (URCAR) debería enfocarse en promover mejoras para reducir los problemas actuales en materia de análisis de riesgo, aportando a los países miembros los siguientes elementos:

- información técnica y científica en materia de medio ambiente, economía y coyuntura;
- una base de datos de análisis de riesgo e información científica sobre amenazas, riesgos emergentes y otros aspectos conexos;
- una amplia base de conocimiento con un buen programa de capacitación;
- procesos de análisis de riesgo transparentes con criterios conocidos y publicados e información clara, precisa, transparente y documentada, realizados en plazos predecibles; y
- apoyo al cumplimiento del principio de transparencia (por ejemplo, por medio de notificación a la OMC y consultas públicas).

Las funciones de la URCAR serían las siguientes:

- mantener un diálogo permanente y coordinado con las unidades de análisis de riesgo de cada país, creando una red regional de trabajo;
- proporcionar informaciones basadas en el conocimiento científico disponible a petición de los servicios sanitarios o de las organizaciones regionales (COSAVE y CVP), o por iniciativa propia. Dichos informes científicos serán independientes, se referirán a cuestiones de riesgo en salud animal, protección vegetal e inocuidad de los alimentos y los aspectos relacionados. Servirán de base para las evaluaciones de riesgo de cada país o decisiones políticas regionales;
- promover y coordinar el desarrollo de metodologías uniformes de análisis de riesgo en los países miembros;
- proporcionar a las autoridades del MERCOSUR apoyo científico y técnico en trabajos en la materia (evaluación de criterios técnicos, por ejemplo);
- ofrecer apoyo técnico para la preparación de planes de contingencia y de procedimientos de gestión de crisis;
- elaborar estudios técnicos y científicos que sean necesarios para el cumplimiento de su cometido, evitando duplicaciones con los programas nacionales;
- crear una base de datos científicos y técnicos actualizada en el ámbito de la seguridad alimentaria, salud animal y protección vegetal;
- diseñar e implementar programas de capacitación para los países;
- establecer los procedimientos que permitan la identificación y caracterización de riesgos emergentes para contribuir a un sistema regional de alerta rápida;
- articular redes regionales y globales con organizaciones que actúen en el ámbito de la seguridad alimentaria, salud animal y protección vegetal a través del intercambio de información, producción de conocimiento, coordinación de acciones y proyectos comunes; y
- contribuir a que el público y otras partes interesadas reciban información fiable, objetiva y comprensible (comunicación del riesgo).

Figura 1: Estructura (escenario ideal)



Además, se considera crítico trabajar en seis áreas:

- 1 institucionalización de la URCAR a nivel MERCOSUR o MERCOSUR ampliado (CAS);
- 2 fortalecimiento de las unidades nacionales de análisis de riesgo;
- 3 apoyo a la creación o formalización en los países miembros donde no haya unidades locales en análisis de riesgo;
- 4 capacitación del personal de la región en la técnica de análisis de riesgo, en la armonización/validación/equivalencia de los sistemas de información sobre diagnóstico, prevención y control de las enfermedades animales, zoonosis, plagas vegetales y enfermedades transmitidas por alimentos;
- 5 definición de una agenda prioritaria de evaluaciones de riesgo en productos de exportación con interés regional y para mercados objetivos; y
- 6 definición de una agenda prioritaria de evaluaciones técnicas para establecer recomendaciones en temas críticos que puedan tener posiciones comunes regionales en el ámbito de la OMC, Codex, OIE y FAO-CIPF.

La URCAR funcionaría como una red de coordinación, con una unidad administrativa y servicios comunes y tres áreas de especialización (salud animal, protección vegetal e inocuidad de alimentos) y un manual único de procedimientos. La URCAR estaría institucionalizada dentro de la estructura del CAS, en una red de coordinación autónoma dependiente del nivel político regional del Consejo de Ministros y donde se cuente con una estrecha articulación público/privada a nivel regional.

La URCAR no deberá tener un *staff* permanente científico, sino que elaborará una lista de expertos regionales e internacionales en condiciones de brindar este tipo de asesoramiento y evaluaciones. Se harán reuniones periódicas de científicos y evaluadores para tomar decisiones. La URCAR tendrá una estructura mínima administrativa, la cual puede coordinarse desde las oficinas del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en Montevideo, donde se encuentra el Programa de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos así como la sede de la secretaría técnica del CAS.

Modo operativo

En términos operativos, la URCAR utilizará los estándares internacionales de la OIE, de la CIPF y del Codex como recomendaciones para el desarrollo de sus evaluaciones. En caso de que no existan recomendaciones para temas específicos o se acuerden nuevos estándares entre las partes, la URCAR propondrá por consenso los estándares mínimos requeridos.

Junto con los responsables de sanidad animal, vegetal e inocuidad, el coordinador velará por el cumplimiento de los plazos previstos en los planes anuales aprobados por las autoridades del CAS así como por el uso de recursos de forma eficiente.

En esos procesos, es esencial que haya un intercambio constante de información entre la URCAR e instituciones como la OIE, FAO, Codex, CVP y COSAVE, además de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Unión Europea (UE) y centros de investigación.

La agenda anual de trabajo de la URCAR la aprobará el Consejo de Ministros del CAS en la última reunión del año previo, por recomendaciones de la reunión extraordinaria anual entre COSAVE, CVP y los directores de inocuidad. La URCAR podría tener la posibilidad de atender consultas de sectores exportadores que tengan un interés regional compartido y cuyos productos hayan sido priorizados en el ámbito del CAS.

Las metas de la Unidad Regional deben tener en cuenta aspectos como:

- generar un programa de capacitación para funcionarios de análisis de riesgo de cada país, utilizando tecnología online;
- apoyar la creación de unidades de análisis de riesgo de los países que lo requieran;
- capacitar hasta 50 funcionarios por año;
- desarrollar hasta 40 estudios por año, considerando que las solicitudes de productos se repiten en los distintos países;
- atender todas las consultas del COSAVE y CVP; y
- desarrollar una base de datos científica para uso de las unidades nacionales de análisis de riesgo.

En definitiva, una Unidad Regional ayudaría a promover una integración sostenible de la región en el mercado mundial, cuestionando las barreras sanitarias injustificadas y ampliando el acceso a mercado sobre la base de la ciencia.



Gustavo Idígoras

Director del Centro de Estudios Agroalimentarios de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y miembro del Grupo de Países Productores del Sur (GPS). Es socio fundador de la Consultora BIM y de la empresa de sustentabilidad GIROBIZ.

SUBSIDIOS AGRÍCOLAS

Opciones para las negociaciones en la OMC sobre ayuda interna y agricultura.

Christophe Bellmann, Jonathan Hepburn

Este artículo explora varias ideas sobre ayuda interna agrícola presentadas recientemente por los gobiernos, con el fin de auxiliar a los negociadores y otros actores a comprender mejor su influencia sobre niveles aplicados de ayuda interna, así como los límites máximos permitidos bajo las normas de la OMC.

En las Naciones Unidas, los gobiernos han acordado poner fin al hambre y a todas las formas de desnutrición para 2030, como parte de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Uno de los objetivos establecidos para lograr esta meta incluye "corregir y evitar las restricciones comerciales y las distorsiones en los mercados agrícolas mundiales".

Desde la 10ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Nairobi (Kenia) en 2015, los negociadores de diferentes países y grupos han presentado una serie de ideas sobre ayuda interna agrícola. Mientras que algunos negociadores sostienen que las nuevas disciplinas necesitan, en última instancia, conducir a niveles aplicados más bajos de ayuda interna que distorsiona el comercio, otros enfatizan que cualquier nueva regla debe priorizar la corrección de los desequilibrios históricos en los niveles de apoyo permitidos. Muchos negociadores consideran ambos objetivos cruciales. La mayor parte de los miembros de la OMC aspira a obtener algún resultado en esta área en la 11ª Conferencia Ministerial, que se celebrará en Buenos Aires (Argentina), en diciembre de 2017.

Este artículo explora varias propuestas recientes presentadas por los gobiernos sobre este tema, con el fin de contribuir para que los negociadores y otros actores comprendan cómo éstos pueden afectar los niveles aplicados de ayuda interna, así como los límites máximos permitidos bajo las normas de la OMC.

Propuestas basadas en la estructura existente del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC

Un primer conjunto de ideas implica recortar la ayuda utilizando las categorías existentes en el actual Acuerdo sobre Agricultura de la OMC. Estas categorías incluyen subvenciones de "compartimento ámbar", que distorsionan el comercio y se calculan utilizando la Medida Global de Ayuda (MGA); el nivel de ayuda *de minimis*; ayuda del "compartimento azul" para limitar la producción; y el párrafo 2 del Artículo 6 del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC, que permite a los países en desarrollo ofrecer cierto tipo de subvenciones sin límites a insumos e inversiones.

Algunos países exportadores agrícolas han manifestado que la MGA y el apoyo *de minimis* deben ser abordados de forma ofensiva, especialmente cuando este tipo de ayuda es utilizada por los mayores productores y exportadores del mundo. Otros, en particular los países en desarrollo, desean que el párrafo 2 del Artículo 6 permanezca inalterado.

La preocupación de recortar el apoyo mediante las categorías actuales de la OMC se mantiene debido a que este enfoque ya ha sido probado en el pasado con limitado éxito y, también, por su escasa posibilidad para corregir los actuales niveles de apoyo máximos permitidos en los diferentes países.

Propuestas para los topes globales

Un segundo conjunto de propuestas se centra en establecer, como base para futuras reducciones graduales, un límite máximo para toda la ayuda interna que causa distorsión al comercio. Esto podría ser un techo fijo (por ejemplo, basado en un período de referencia

Categorías de ayuda interna en agricultura

Compartimento ámbar

Causa distorsiones al comercio y, por lo tanto, está sujeta a compromisos de reducción.

De minimis

Niveles mínimos de ayuda interna permitidos aunque distorsionen el comercio – hasta el 5% del valor de la producción para los países desarrollados y el 10% para la mayoría de los países en desarrollo.

Compartimento azul

Causa distorsiones al comercio y, por lo tanto, está sujeta a restricciones en la producción u otras condiciones diseñadas para reducir la distorsión – las cuales actualmente no se encuentran limitadas por las reglas de la OMC.

anterior) o un techo variable – por ejemplo, una parte del valor de la producción agrícola (VdP), que mide la producción real de un país. Muchos países en desarrollo sostienen que cualquier nuevo techo en la ayuda interna que distorsiona el comercio debe reducir la brecha entre los actuales niveles máximos consolidados y los niveles reales aplicados.

Si bien algunos países desean que se incluya un tope para todos los tipos de ayuda que distorsionan el comercio enumerados en el Acuerdo sobre Agricultura, otros han explícitamente sugerido excluir los subsidios a los insumos y las inversiones para los agricultores de bajos ingresos y escasos recursos.

Los negociadores también tendrían que definir si los países pueden utilizar los niveles de ayuda interna *de minimis* por encima del tope global. Independientemente de cómo se defina, el propósito de tal límite global es consolidar los niveles aplicados de ayuda interna y, así, servir como base para futuras nuevas reducciones graduales a lo largo de un período determinado.

Nuestro estudio examina estas propuestas analizando los niveles históricos de subsidios proporcionados por las principales economías, de acuerdo con los datos notificados por los gobiernos a la OMC. Explora escenarios con un techo fijo establecido en 5, 10 o 20% de VdP, ya sea considerando un período de base fijo (2008-2010), o como un porcentaje del VdP actual.

Sobre la base de las notificaciones más recientes de la OMC, sólo algunas de las propuestas de negociación parecen conducir a recortes efectivos en los niveles aplicados de ayuda interna que distorsiona el comercio. Del análisis, podemos concluir que, si bien un límite mínimo fijado en 5% de la producción agrícola no requeriría que la Unión Europea (UE) redujera los niveles efectivamente aplicados de subsidios, sí sería inferior a los actuales niveles de apoyo aplicados en Japón – y posiblemente también para Canadá – y sería sólo ligeramente superior a los de los Estados Unidos.

Al mismo tiempo, un límite mucho menos restrictivo, fijado en 20% de la producción agrícola, sería considerablemente superior a los límites comprometidos por algunos países en la OMC bajo las normas vigentes. Este sería el caso de Canadá, Estados Unidos y también de la UE, en el caso de un tope flotante o variable. Establecer un límite máximo seguiría restringiendo las flexibilidades existentes si el nuevo límite toma en consideración el nivel *de minimis* y los pagos realizados bajo el compartimento azul además de lo considerado en la MGA.

Aunque China e India no han notificado a la OMC datos oficiales sobre subvenciones agrícolas desde 2010, los niveles aplicados de ayuda que distorsiona el comercio son inferiores al 5%, a menos que se incluyan en el cálculo los subsidios concedidos a los productores de bajos ingresos y escasos recursos. Para esos países, ninguno de los escenarios probados requeriría recortes efectivos en la ayuda interna aplicada. Sin embargo, a excepción del escenario en que el nivel *de minimis* se limita al 20% del VdP actual (es decir, el *status quo*), todos los escenarios impondrían restricciones adicionales a esos países. Esto supondría una desviación significativa de los proyectos de textos de negociación presentados en el pasado. Por consiguiente, las propuestas de un tope tendrían que adaptarse a las circunstancias específicas de los diferentes miembros e introducirse gradualmente en un período de reducción a lo largo de varios años. Un enfoque híbrido entre un tope fijo y flotante, o variable, también podría ser considerado.

Propuestas de negociación para productos específicos y reducción de la concentración

Un tercer conjunto de propuestas se ha concentrado en evitar la concentración excesiva de ayuda mediante el establecimiento de disciplinas, o normas, para la concesión de subsidios a productos específicos. Una vez más, los países desarrollados y los en desarrollo manifiestan apoyos diferentes, con una mayor proporción de países desarrollados defendiendo la concesión de ayuda que distorsiona el comercio para productos específicos

Cuadro 1: Puntos claves

- Un techo bajo para la ayuda interna causante de distorsión del comercio (5% de la producción agrícola) podría afectar a Canadá y Japón, pero un techo alto 20% podría quedar por encima de los actuales niveles consolidados para Canadá, Estados Unidos y la UE.
- Los últimos datos sobre las subvenciones agrícolas concedidas por China e India (en 2010) muestran que la ayuda interna causante de distorsión del comercio es muy inferior al 5% de la producción agrícola, si se excluyen los subsidios a la inversión y a los insumos de India.
- Corea del Sur, Estados Unidos, Japón y la UE son algunos de los países que concentran los subsidios en ciertos productos claves (arroz, lácteos, maíz, trigo, carne de cerdo y carne vacuna).
- Entre los mercados distorsionados, las proyecciones de producción y comercio indican que el arroz y el maíz podrían ser productos claves para los países menos adelantados.

y países en desarrollo que prefieren la ayuda no específica a productos (como los subsidios y fertilizantes).

En Corea del Sur, por ejemplo, únicamente el arroz constituye el 70% de toda la ayuda que distorsiona al comercio, mientras que en la UE esta proporción representa el 35% para los productos lácteos y casi el 20% para el trigo. En los Estados Unidos, los productos lácteos y el maíz representaron casi el 40% de toda la ayuda que distorsiona el comercio, mientras que en Japón la participación de la carne de cerdo y la carne vacuna representó conjuntamente casi dos tercios del total.

Los negociadores han sugerido varias opciones para disciplinar los subsidios a productos específicos. La primera opción consiste en fijar un tope por producto específico, que puede ser un límite fijo o un porcentaje del VdP. Otra posibilidad es definir un límite por producto específico como un porcentaje determinado de la ayuda total que distorsiona el comercio. Del mismo modo, un tercer enfoque sugiere el establecimiento de un límite por producto como un porcentaje determinado del total de ayuda que distorsiona el comercio permitida, considerando el nuevo tope global. Por último, una innovación propuesta por los países menos adelantados para tratar el algodón concretamente sería fijar un límite a las transferencias que se realizan a los productores de algodón calculadas como un porcentaje de los ingresos brutos agrícolas de este producto.

En general, sin embargo, las grandes variaciones en el apoyo de las propuestas sobre productos específicos, considerando los diferentes productos básicos y países, pueden dificultar en el corto plazo establecer un límite uniforme para todos los productos, a menos que se contemplen excepciones o flexibilidades específicas. Una alternativa posible para superar este problema podría ser establecer límites basados en niveles históricos con compromisos de reducción gradual.

Propuestas para el tratamiento de las distorsiones al comercio

Finalmente, varias propuestas sobre el tratamiento de las distorsiones al comercio se han centrado en calibrar los niveles de compromisos basados en diferentes factores.

Como en el pasado, numerosos miembros de la OMC siguen haciendo hincapié en la necesidad de un trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, los países menos adelantados, las economías pequeñas y vulnerables y los países en desarrollo importadores netos de alimentos. Un trato especial y diferenciado puede implicar que aquellos países que se encuentran contemplados en estos grupos resulten exentos de compromisos de reducción relacionados con la ayuda interna, así como en la cooperación vinculada a asistencia técnica y fomento de las capacidades.

Sin embargo, otras propuestas sobre las reglas de ayuda incluyen tener en cuenta factores tales como la relevancia de los flujos comerciales, los volúmenes de producción o el impacto en los países pobres.

Los socios deberían considerar entonces el desarrollo de un índice, o un indicador formal, que combine diferentes variables como el volumen de producción, la proporción de la producción doméstica que se exporta, la cuota que ese país representa en las exportaciones mundiales y la intensidad de la ayuda, probablemente definida como el porcentaje destinado al producto específico dentro del VdP. Con arreglo a este enfoque, el índice proporcionaría para cada miembro de la OMC un coeficiente que indicaría el nivel de compromiso que debe asumir cada país.

Del mismo modo, los países también podrían considerar el desarrollo de disciplinas más agresivas para las medidas que causan distorsiones en aquellos productos de especial importancia para los países menos adelantados. Utilizando el análisis de la Perspectiva Agrícola preparado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por su sigla en inglés), es posible identificar un conjunto de productos que revisten particular importancia para este grupo, ya sea porque se espera que se produzcan grandes volúmenes por los países menos adelantados, o porque se exportan o importan en grandes volúmenes. Mientras que el arroz y el maíz son especialmente importantes a este respecto, otros productos fuertemente distorsionados son aparentemente menos importantes para el grupo (como la carne vacuna, el cerdo y los productos lácteos).

Consideraciones finales

Los negociadores de la 11ª Conferencia Ministerial de la OMC deberán lograr un delicado equilibrio entre la agricultura y otros temas. Entre otras cosas, tendrán que considerar la mejor forma de lograr avances en materia de comercio agrícola, tomando debida cuenta de las sensibilidades de los países, mismo en el ámbito de la ayuda interna.

Existe consenso de que los negociadores deberán adoptar medidas significativas para corregir los desequilibrios históricos en los niveles máximos permitidos de la ayuda que distorsiona el comercio y establecer, al mismo tiempo, un marco adecuado para disciplinar en el futuro los niveles de apoyo aplicados.

Las diferentes ideas presentadas constituyen un punto de partida útil para discusiones sobre la mejor forma de delinear las futuras disciplinas. Los responsables por la formulación de políticas y los negociadores deben ahora considerar cómo refinar y elaborar esas ideas para favorecer la construcción de mercados de alimentación y agrícolas más equitativos y sostenibles.



Christophe Bellmann

Investigador senior asociado de ICTSD.



Jonathan Hepburn

Director senior del Programa de Agricultura de ICTSD.

❶ Este artículo resume algunas de las conclusiones de un documento más extenso preparado por el International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD). Véase: Bellmann, Christophe; Hepburn, Jonathan. *Negotiating Global Rules on Agriculture Domestic Support: Options for the WTO's Buenos Aires Ministerial Conference*. Ginebra: ICTSD, 2017. Disponible en: <<http://bit.ly/2vJROU7>>.

Publicaciones

Puentes recomienda publicaciones de ICTSD y otras instituciones que están contribuyendo al estudio y una mejor comprensión del comercio internacional y el desarrollo sostenible, con implicaciones también para América Latina.



Disposiciones de Sostenibilidad en los Acuerdos Regionales de Comercio: ¿Pueden ser Multilateralizadas? **ICTSD, BID – julio 2017**

Con el surgimiento de acuerdos comerciales regionales (ACR), el papel del desarrollo sostenible se ha convertido en una discusión inevitable. Los acuerdos recientes reflejan una tendencia a favor de la incorporación de disposiciones integrales de desarrollo sostenible no sólo entre los países desarrollados, sino también entre algunos países en desarrollo. La creciente homogeneidad en estos ACR ha abierto discusiones sobre una posible convergencia entre regionalismo y multilateralismo. Sin embargo, hay desafíos asociados con la convergencia, particularmente con la aplicabilidad de las provisiones de sostenibilidad. Asimismo, existe una renuencia general entre los países en desarrollo de asumir compromisos vinculantes en este ámbito. El documento explora varias opciones a este respecto. Para acceder al documento, haga clic [aquí](#).



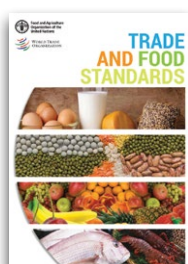
Mantenerse al Mandato del Trabajo: consideraciones claves de política comercial para la Cumbre del G20 en Hamburgo y más allá **ICTSD – julio 2017**

Este volumen publicado por el International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) reúne a los principales expertos en una compilación de recomendaciones de políticas para el G20. Las contribuciones proporcionan nuevas ideas sobre cómo fortalecer la administración del G20 en la economía mundial hacia la sostenibilidad. La compilación se centra en cuatro áreas: los desafíos que enfrenta el sistema multilateral de comercio; la reforma del régimen internacional de inversiones; la gobernanza de la economía digital; y las soluciones relacionadas con el comercio para mitigar y adaptarse al cambio climático. Se presentaron varias contribuciones en un taller del ICTSD celebrado paralelamente a la reunión del Grupo de Trabajo sobre Comercio e Inversión del G20, celebrada en Berlín en febrero de 2017. Para acceder al documento en inglés, pulse [aquí](#).



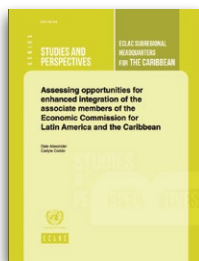
La ayuda para el comercio en síntesis 2017: fomentar el comercio, la inclusión y la conectividad en favor del desarrollo sostenible **OMC, OCDE – julio 2017**

El presente informe se basa en el análisis de los costos comerciales y lleva este al ámbito digital, dando cuenta del carácter cambiante del comercio. Su objetivo es tratar de encontrar formas de apoyar a los países en desarrollo – especialmente a los menos adelantados – para que puedan obtener beneficios del comercio. El informe pasa revista a las medidas que están siendo adoptadas por una gran variedad de partes interesadas – entre otros, gobiernos, sus asociados para el desarrollo y el sector privado – a fin de promover la conectividad en favor del desarrollo sostenible. Para acceder al documento en español, haga clic [aquí](#).



Comercio y Estándares de Alimentos **FAO, OMC – julio 2017**

La publicación ofrece una explicación concisa de cómo se establecen y aplican las normas alimentarias internacionales. Defiende una mayor participación de los países en desarrollo tanto en los procesos armonizados de establecimiento de normas alimentarias en el Codex Alimentarius como en los Comités de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) y de Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Para acceder al documento en inglés, pulse [aquí](#).



Análisis de las oportunidades para una mejor integración de los miembros asociados de la CEPAL

CEPAL – junio 2017

Como una fase preliminar de acción en respuesta a la resolución que pide mayor presencia de los miembros asociados en el trabajo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), este estudio busca explorar desafíos comunes de los miembros asociados no soberanos y asignar opciones estratégicas para mejorar su nivel de integración con organizaciones regionales e internacionales en la Subregión del Caribe. Además, el estudio propone formas de mejorar la integración de los miembros asociados por medio de la cooperación Sur-Sur y otros mecanismos colaborativos con los países vecinos. Finalmente, el estudio reconoce que las circunstancias individuales son únicas y recomienda acciones para tenerlo en cuenta. Para acceder al documento en inglés, pulse [aquí](#).



Qué está en juego en ayuda interna – XI Conferencia Ministerial de la OMC

INAI – abril 2017

En víspera de la 11ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), a realizarse en Buenos Aires, los miembros han demostrado voluntad de avanzar en las negociaciones de ayuda interna y enfocarse en los apoyos que distorsionan el comercio. La Fundación Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI) hace un análisis de los efectos para el sector agroindustrial de la eliminación total de los apoyos internos en el marco de dos escenarios diferentes: uno de continuación de la tendencia actual, y otro de precios bajos. El informe destaca la importancia del *enforcement*: la definición de nuevas reglas resulta de gran interés, pero también es esencial el cumplimiento de las normas existentes en un escenario de incertidumbre como el actual. El documento en español está disponible [aquí](#).



Inversión en Capacidades para el Comercio Inclusivo

OMC, OIT – julio 2017

La publicación sostiene que, en el actual contexto de la globalización, la capacidad de respuesta de la oferta de habilidades a la demanda es particularmente importante. Esta publicación, basada en los hallazgos de la literatura pertinente y del programa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el Desarrollo de las Competencias para el Comercio y la Diversificación Económica (STED, por su sigla en inglés), demuestra que las políticas de desarrollo de competencias son fundamentales para ayudar a las empresas a participar en el comercio y a los trabajadores a encontrar buenos puestos de trabajo. Para acceder al informe completo en inglés, pulse [aquí](#).



Comités Nacionales de Facilitación del Comercio: Prácticas y Desafíos Actuales

OMC – junio 2017

Tras la reciente entrada en vigor del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC), una nueva publicación muestra que muchos miembros de la OMC han establecido organismos nacionales para coordinar la aplicación del Acuerdo y necesitan de asistencia para lograr su funcionamiento efectivo. La publicación ofrece información detallada sobre las mejores prácticas para establecer un comité nacional de facilitación del comercio, a partir de una encuesta administrada a más de 100 miembros y observadores y las experiencias intercambiadas en un taller que se celebró en 2016. Para acceder al documento completo en inglés, pulse [aquí](#).

SIGA EXPLORANDO EL MUNDO DEL COMERCIO Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA RED BRIDGES DE ICTSD

PONTES

Análisis e información sobre comercio y desarrollo sostenible para el mundo de habla portuguesa- *Idioma português*
www.ictsd.org/news/pontes

BIORES

Análisis e información sobre comercio y ambiente para una audiencia global- *Idioma inglés*
www.ictsd.org/news/biores

BRIDGES

Noticias relativas al comercio mundial desde una perspectiva de desarrollo sostenible- *Idioma inglés*
www.ictsd.org/news/bridges

桥

Análisis e información sobre comercio y desarrollo sostenible para el mundo de habla china- *Idioma chino*
www.ictsd.org/news/qiao

МОСТЫ

Análisis e información sobre comercio y desarrollo con enfoque en los países del CEI- *Idioma ruso*
www.ictsd.org/news/bridgesrussian

BRIDGES AFRICA

Análisis e información sobre comercio y desarrollo sostenible con énfasis en África- *Idioma inglés*
www.ictsd.org/news/bridges-africa

PASSERELLES

Análisis e información sobre comercio y desarrollo sostenible con énfasis en África- *Idioma francés*
www.ictsd.org/news/passerelles



Centro Internacional para el Comercio y el Desarrollo Sostenible

Chemin de Balexert 7-9
1219 Geneva, Switzerland
+41-22-917-8492
www.ictsd.org

La producción de PUENTES es posible gracias al apoyo generoso de todos nuestros donantes, que incluyen:

DFID – Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido

SIDA – Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional

DGIS – Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda

Ministerio de Relaciones Exteriores, Dinamarca

Ministerio de Relaciones Exteriores, Finlandia

Ministerio de Relaciones Exteriores, Noruega

Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio de Australia

PUENTES recibe publicidad y patrocinios para apoyar el costo de la publicación e incrementar su impacto a nivel global y en Latinoamérica. La aceptación de las propuestas queda a discreción de los editores. Las opiniones expresadas en los artículos son responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista de ICTSD.



Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons de Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

ISSN 1563-0013

